

II. RÉGIMEN COMERCIAL Y DE INVERSIONES

1) PANORAMA GENERAL

1. Desde su último examen en 2003, Chile no ha introducido cambios fundamentales en su política de comercio exterior, cuyo principal objetivo sigue siendo profundizar la inserción de Chile en la economía internacional, promoviendo el desarrollo exportador, la protección de las inversiones, la competitividad y el cambio tecnológico, en un marco de reglas estables y con políticas que contribuyan a reforzar la equidad social.

2. Chile es Miembro fundador de la OMC, donde participa activamente a favor de la conclusión exitosa de las negociaciones del Programa de Doha para el Desarrollo. Chile considera que es fundamental contar con un sistema multilateral de comercio fortalecido y reconoce que la OMC es el único foro donde se pueden resolver algunos problemas pendientes de la agenda comercial global tales como la eliminación de los subsidios agrícolas. Durante el periodo examinado, Chile ha presentado un gran número de notificaciones a los diversos órganos de la OMC. Asimismo, ha hecho uso del mecanismo de solución de diferencias, habiendo estado involucrado como parte demandada en cuatro diferencias, como parte reclamante en dos y como tercero en once casos.

3. Una de las características más marcadas de la política comercial chilena es su énfasis en la concertación de acuerdos comerciales regionales (ACR). Chile ha suscrito 21 ACR con 57 países y realiza el 92 por ciento de su comercio de mercancías con sus socios preferenciales. Como en el caso de otros Miembros activamente involucrados en ACR, los efectos económicos de los tratados negociados por Chile son complejos, pudiendo incrementar o reducir el bienestar económico. En el caso particular de Chile, las preocupaciones que podría suscitar su extensa y creciente red de ACR se ven paliadas por su sólido apoyo al sistema multilateral.

4. Chile otorga el trato nacional a los inversores extranjeros, con ciertas excepciones que se aplican en algunas actividades que comprenden el transporte marítimo de cabotaje, el transporte aéreo, la pesca y los medios de comunicación. Chile mantiene numerosos acuerdos para promover y proteger las inversiones y para evitar la doble tributación.

2) MARCO DE POLÍTICA COMERCIAL Y DE INVERSIONES

i) Marco jurídico e institucional general

5. Chile es una república unitaria y democrática, regida por tres poderes: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Administrativamente, el país está dividido en 14 regiones y una región metropolitana. Las regiones se dividen en provincias y éstas en comunas.

6. El titular del Poder Ejecutivo es el Presidente de la República, quien es también el Jefe de Estado. El Presidente es elegido por sufragio universal directo. Mediante una reforma constitucional aprobada en 2005, la duración del mandato presidencial se redujo de seis a cuatro años; el Presidente no puede ser reelegido para el periodo siguiente.¹ Los Ministros de Estado son nombrados por el Presidente. La última elección presidencial se llevó a cabo en diciembre de 2005, al mismo tiempo que las elecciones de diputados y de la mitad de los senadores.

7. El Poder Legislativo reside en el Congreso Nacional, que se compone de la Cámara de Diputados y del Senado. La Cámara de Diputados está integrada por 120 miembros, elegidos por

¹ Artículo 25 de la Constitución Política de la República de Chile de 1980 (D.O. 24.10.1980), modificado por la Ley de Reforma Constitucional N° 20.050 (D.O. 26.08.2005).

votación directa para un periodo de cuatro años. El Senado se compone de 38 miembros elegidos directamente por circunscripciones senatoriales en función de las regiones del país. Los Senadores duran ocho años en su cargo y se renuevan alternadamente cada cuatro años.² La reforma constitucional de 2005 eliminó los escaños de los senadores designados, correspondientes a ex-representantes de varios órganos del Estado, incluidas las Fuerzas Armadas, así como los cargos de senadores vitalicios que se asignaban a los ex Presidentes de la República.

8. El Poder Judicial reside en la Corte Suprema de Justicia, integrada por 21 Ministros que son designados por el Presidente y confirmados por el Senado por una mayoría de dos tercios. Jerárquicamente, por debajo de la Corte Suprema se encuentran las Cortes de Apelaciones que se distribuyen a lo largo del territorio nacional; sus miembros son designados por el Presidente a propuesta en terna de la Corte Suprema de Justicia. Dependiendo de las Cortes de Apelaciones respectivas, los juzgados pueden ser de lo civil, del crimen, de familia y del trabajo. También existen tribunales electorales regionales y tribunales militares.

9. El Presidente de la República tiene la facultad de concluir, firmar y ratificar tratados internacionales, que deben ser sometidos a la aprobación del Congreso Nacional³, junto con información sobre su contenido y alcance. El Presidente tiene asimismo la facultad exclusiva de denunciar un tratado o retirarse del mismo, debiendo pedir opinión de ambas Cámaras en caso de que el tratado haya sido aprobado por el Congreso.⁴ Es atribución del Congreso Nacional aprobar o desechar los tratados internacionales que le presente el Presidente de la República antes de su ratificación. El Congreso puede sugerir la formulación de reservas y declaraciones interpretativas a un tratado internacional, siempre que ellas procedan de conformidad a lo previsto en el tratado o en las normas de derecho internacional. No requieren aprobación del Congreso Nacional las medidas que el Presidente adopte o los acuerdos que celebre para el cumplimiento de un tratado en vigor, a menos que versen sobre materias propias de ley; tampoco la requieren los tratados que adopte en ejercicio de su potestad reglamentaria.⁵

10. Los procedimientos legislativos de Chile distinguen entre leyes interpretativas de la Constitución, leyes orgánicas constitucionales (LOC), leyes de quórum calificado, leyes ordinarias, decretos con fuerza de ley (DFL) y decretos ley. Las leyes interpretativas de la Constitución son las que precisan el sentido y alcance de un precepto o una expresión de la Constitución y para ser aprobadas, modificadas o derogadas requieren de los tres quintos de los diputados y senadores en ejercicio. Las LOC se refieren a ciertas materias expresamente estipuladas en la Constitución y requieren para su aprobación, modificación o derogación, de las cuatro séptimas partes de los diputados y senadores en ejercicio. Tanto las leyes interpretativas de la Constitución como las LOC deben ser sometidas a un control de constitucionalidad por parte del Tribunal Constitucional antes de su promulgación. Las leyes de quórum calificado se aprueban, modifican y derogan por mayoría absoluta de los diputados y senadores en ejercicio. La aprobación de las leyes ordinarias requiere de mayoría simple de los votos emitidos por los miembros del Congreso Nacional presentes en el momento de la votación. Los DFL son dictados por el Presidente de la República sobre materias propias de ley con fundamento en leyes delegatorias de facultades dictadas por el Congreso Nacional. Los decretos ley fueron dictados por el Poder Ejecutivo sobre materias propias de una ley en periodos en que el Congreso estuvo impedido para ejercer sus funciones. La Constitución está por encima de todas las leyes.

² Artículos 47 y 49 de la Constitución Política de 1980, modificados por la Ley N° 20.050.

³ Artículo 32 de la Constitución Política de 1980.

⁴ Artículo 54 de la Constitución Política de 1980, modificado por la Ley N° 20.050.

⁵ Artículo 54 de la Constitución Política de 1980, modificado por la Ley N° 20.050.

11. Los diputados, los senadores y el Presidente de la República pueden proponer proyectos de ley. La Constitución establece que el Presidente de la República tiene la iniciativa exclusiva para proponer proyectos de ley sobre asuntos relativos a cambios en la organización política o administrativa del país, el presupuesto anual, los impuestos y los aranceles. Las leyes se publican en el Diario Oficial y entran en vigor el día de su publicación a menos que se indique otra cosa.

12. Los tratados internacionales se incorporan a la legislación chilena. Una vez que el Congreso Nacional aprueba un tratado, el Ejecutivo promulga un decreto supremo mediante el cual atestigua a la Nación la existencia de dicho tratado y ordena su cumplimiento. Los Acuerdos de la OMC fueron incorporados a la legislación nacional mediante el Decreto Supremo N° 16 del Ministerio de Relaciones Exteriores, de 5 de enero de 1995; tienen el mismo rango que las leyes ordinarias y pueden ser invocados ante los tribunales chilenos. Los Acuerdos de la OMC prevalecen sobre la legislación nacional si contienen un mayor grado de especificidad, cuando se refieran a los mismos temas, o si establecen un nuevo conjunto de normas que abarcan temas de los que no se ocupa la legislación nacional, o cuando regulan instituciones o temas estableciendo normas cuyo sentido o cuyos efectos jurídicos estén en contradicción con el sentido o los efectos jurídicos de legislación anterior. Además, en los casos en que los Acuerdos de la OMC entraron en vigor después de la legislación nacional correspondiente, se aplica el principio de derogación tácita.

13. En octubre de 2003, se aprobó la Ley N° 19.912 con el objetivo de adecuar varias disposiciones de la legislación chilena a los Acuerdos de la OMC en áreas que incluyen la valoración en aduana, los reglamentos técnicos, la imposición, la propiedad intelectual y las medidas en materia de inversiones relacionadas con el comercio en el sector de los vehículos automóviles.

14. La Ley sobre acceso a la información pública (Ley N° 20.285) entró en vigencia en abril de 2009 con el objetivo de regular el principio de transparencia de la función pública. Entre otros, la Ley establece los principios de la libertad de información, apertura, máxima divulgación y gratuidad. Asimismo establece el deber de la Administración del Estado de mantener a disposición permanente del público, a través de sus sitios electrónicos, determinados antecedentes actualizados, incluidos los documentos que han sido objeto de publicación en el Diario Oficial. La Ley también establece el Consejo de Transparencia con el objetivo de promover la transparencia, fiscalizar el cumplimiento de las normas sobre transparencia y garantizar el derecho de acceso a la información. La adopción de la Ley fue impulsada en parte por un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en 2006 condenó al Estado de Chile por denegar el acceso a información de la que disponía el Comité de Inversiones Extranjeras sobre una inversión en la región de Magallanes (ver también sección 3) *infra*.⁶

ii) Objetivos y formulación de la política comercial

15. No ha habido cambios fundamentales en la dirección de la política de comercio exterior de Chile desde 2003. Sus objetivos son profundizar la inserción del país en la economía internacional, combinando el desarrollo exportador con la promoción y la protección de inversiones; favoreciendo la competitividad y la difusión del cambio tecnológico, en un contexto de reglas estables, de vigilancia de la competencia desleal, y con políticas que contribuyan a reforzar la equidad social.⁷

16. Durante el periodo objeto de examen, Chile ha otorgado un papel fundamental a la conclusión de ACR en el marco de su estrategia comercial, al tiempo que ha buscado que éstos sean compatibles con las reglas multilaterales. Asimismo, Chile ha mantenido un papel activo en las negociaciones de la OMC, en donde pugna por la conclusión exitosa de la Ronda Doha.

⁶ La historia legislativa de la Ley N° 20.285 puede consultarse en: <http://www.bcn.cl/ley-transparencia>.

⁷ Información en línea de la DIRECON. Consultado en: <http://www.direcon.cl>.

17. La formulación de la política de comercio exterior es facultad del Poder Ejecutivo. La Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (DIRECON) del Ministerio de Relaciones Exteriores (RREE) es la principal responsable de la conducción de las negociaciones comerciales internacionales y de la promoción de las exportaciones. Colaboran también en la formulación de la política comercial los Ministerios de Hacienda, Economía y Agricultura, y la Secretaría General de la Presidencia, agrupados en el Comité Interministerial para las Relaciones Económicas Internacionales, que preside el Ministro de RREE. La DIRECON también mantiene consultas regulares con el Congreso Nacional sobre asuntos de política comercial.

18. Con objeto de brindar apoyo al Comité Interministerial, en 1992 se creó el Comité de Participación del Sector Privado que tiene como función informar sobre la evolución de las negociaciones comerciales al sector privado y recabar sus puntos de vista. Este Comité está presidido por el Ministerio de Economía e integrado por los Ministerios de RREE, Hacienda y Agricultura, por la Secretaría General de la Presidencia y por el Director General de la DIRECON, así como por dos representantes del sector privado, dos representantes sindicales y tres expertos en negociaciones comerciales internacionales.

19. El Gobierno mantiene consultas permanentes con el sector privado, las asociaciones gremiales y la sociedad civil en general. Entre las instancias más importantes de participación del sector privado figura el Consejo Público-Privado para el Desarrollo Exportador, que reúne a empresarios de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) con los funcionarios de las instituciones públicas que intervienen en la formulación y aplicación de la política de comercio exterior. El objetivo fundamental de este Consejo es potenciar la capacidad exportadora de Chile. Sus principales áreas de trabajo son la facilitación del comercio; el fomento al desarrollo productivo, tecnológico y la calidad; la inserción internacional; la promoción de las exportaciones, las inversiones y el turismo; y el transporte y la logística. Otra instancia de diálogo entre el sector privado y las autoridades es el Consejo de Negociaciones Internacionales y Comercio Exterior, creado por la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA). Adicionalmente, el sector privado chileno participa en el Consejo Consultivo Empresarial del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico.

20. Las autoridades indican que también se ha mantenido un diálogo con la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y otras organizaciones sindicales en relación con las distintas negociaciones comerciales que ha llevado a cabo Chile. La sociedad civil participa en la discusión de los asuntos de política comercial a través de organizaciones no gubernamentales, colegios profesionales, entidades académicas, organizaciones indígenas, personalidades de la cultura y otros interesados.⁸

3) INVERSIÓN EXTRANJERA

i) Marco jurídico

21. Las autoridades consideran que la capacidad de atraer inversión extranjera es esencial para el crecimiento económico de Chile y forma parte integral de su política de apertura económica. Asimismo, opinan que un marco legal claro y estable, las políticas de libre mercado y el crecimiento impulsado por las exportaciones son algunas de las ventajas comparativas con que cuenta Chile para atraer flujos de inversión extranjera.⁹

22. En Chile no existe una ley general sobre inversiones. Los marcos jurídicos utilizados para ingresar la inversión extranjera a Chile son el Capítulo XIV del Compendio de Normas de Cambios Internacionales del Banco Central y el Estatuto de la Inversión Extranjera (Decreto Ley N° 600 de

⁸ Información en línea de la DIRECON. Consultado en: <http://www.direcon.cl>.

⁹ Comité de Inversiones Extranjeras. Consultado en: <http://www.inviertaenchile.cl>.

1974, en adelante DL N° 600).¹⁰ Los inversores extranjeros pueden decidir ingresar sus capitales utilizando cualquiera de estos dos medios; en el periodo 2003-08, un 46 por ciento del capital extranjero entró a Chile a través del DL N° 600.

23. Chile otorga generalmente el trato nacional a los inversores extranjeros y les permite participar hasta con el 100 por ciento del capital de una empresa en la gran mayoría de los sectores económicos. Sin embargo, en virtud de leyes específicas se aplican restricciones al trato nacional o al acceso al mercado en ciertas actividades. Las excepciones comprenden el transporte marítimo de cabotaje, el transporte aéreo, la pesca y los medios de comunicación (ver cuadro AII.1). En algunos casos, las restricciones se condicionan al principio de reciprocidad internacional. Además, los extranjeros no pueden adquirir tierras del Estado que estén situadas dentro de una franja de 10 km desde la frontera y de 5 km desde la costa.¹¹

24. Algunas actividades están reservadas al Estado, tales como la exploración y explotación de litio, los depósitos de hidrocarburos líquidos y gaseosos localizados en zonas marítimas bajo jurisdicción nacional o en áreas clasificadas por ley como de importancia para la seguridad nacional, y la producción de energía nuclear. No obstante, en ciertas circunstancias y mediante autorización presidencial, tanto las empresas nacionales como las extranjeras pueden participar en estos sectores.

25. Cualquier persona natural o jurídica extranjera, así como los ciudadanos chilenos con residencia y domicilio en el exterior, pueden invertir al amparo del DL N° 600. La inversión puede materializarse en moneda extranjera de libre convertibilidad, bienes físicos, diversas formas de tecnología, créditos asociados a una inversión extranjera, capitalización de créditos y deudas externas, y capitalización de utilidades.

26. Conforme al DL N° 600, los inversores extranjeros que deseen invertir en proyectos cuyo monto exceda de 5 millones de dólares EE.UU.¹² deben presentar una solicitud¹³ ante el Comité de Inversiones Extranjeras¹⁴, quien se encarga de examinar y, en su caso, aprobar cada solicitud. Durante el periodo objeto de examen, el Comité no ha rechazado ninguna solicitud. El Comité está integrado por los Ministros de Economía (quien lo preside), Hacienda, Relaciones Exteriores, Planificación y Cooperación, el Ministro del ramo que se vincule con la solicitud de inversión, y el Presidente del Banco Central.

27. Para algunos proyectos de inversión extranjera se precisa entregar información adicional a las autoridades sectoriales, quienes a su vez presentan un informe al Comité de Inversiones Extranjeras. Así, la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras emite informes sobre los proyectos de inversión en el área bancaria y financiera y la Superintendencia de Valores y Seguros lo hace con respecto a las operaciones de fondos de inversión y seguros (ver también capítulo IV 7) iii)). Cuando se trata de una inversión en minería, corresponde a la Comisión Chilena del Cobre presentar un

¹⁰ Decreto Ley N° 600, modificado el 16 de diciembre de 1993 y el 16 de junio de 2005 por la Ley N° 20.026, a su vez modificada por la Ley N° 20.097 de 8 de abril de 2006.

¹¹ Decreto Ley N° 1939, de 10 de noviembre de 1977, y Decreto con Fuerza de Ley 4 del Ministerio de Relaciones Exteriores, de 10 noviembre de 1967.

¹² Cuando la inversión se compone de bienes físicos, tecnología y capitalización de utilidades o de créditos, el monto mínimo es 2,5 millones de dólares EE.UU.

¹³ Los formularios de solicitud de inversión extranjera están disponibles en: <http://www.inviertaenchile.cl>.

¹⁴ Artículo 16 del DL N° 600. También requieren autorización del Comité las inversiones extranjeras relacionadas con actividades que normalmente desarrolla el Estado, o que se efectúen en servicios públicos o en los medios de comunicación social, así como las que realice un Estado extranjero o una persona jurídica extranjera de derecho público.

informe sobre el proyecto, mientras que la Secretaría de Pesca emite informes sobre los proyectos de inversión en el sector pesquero (ver también capítulo IV 3) y 4)). La Comisión Nacional del Medio Ambiente evalúa el impacto ambiental de los proyectos.

28. La autorización de inversión extranjera al amparo del DL N° 600 toma la forma de un contrato de duración indefinida celebrado entre el Estado Chileno y el inversor extranjero, el cual no puede ser modificado unilateralmente por el Estado. En el contrato, que no tiene costo para el inversor, se fija el plazo del que éste dispone para ingresar su capital, el cual no debe exceder de ocho años para las inversiones en minería y de tres años para las demás. El Comité puede extender dicho plazo hasta 12 años en el caso de las inversiones en minería que requieran exploraciones previas, y hasta ocho años para los proyectos no mineros de un monto igual o superior a 50 millones de dólares EE.UU., cuando la naturaleza del proyecto así lo requiera.¹⁵

29. Con arreglo al artículo 9 del DL N° 600, la inversión extranjera y las empresas en las que ésta participa se sujetan al régimen jurídico aplicable a la inversión nacional y no pueden ser objeto de discriminación.

30. El DL 600 garantiza a los inversores extranjeros el derecho de repatriar el capital invertido al cabo de un año y las utilidades tan pronto sean generadas, así como el acceso al mercado cambiario formal.¹⁶ Los inversores extranjeros acogidos al DL N° 600 también tienen derecho a incluir en su contrato una cláusula que establezca que se les mantendrá invariable, por el periodo autorizado para realizar la inversión, el impuesto sobre el valor agregado y los aranceles sobre los bienes de capital importados que no se produzcan en Chile y que se encuentren incorporados en una lista especial.¹⁷

31. Los inversores extranjeros acogidos al DL N° 600 pueden optar por un Régimen Especial de Invariabilidad Tributaria, que somete la renta de una empresa a una carga impositiva fija del 42 por ciento por un plazo máximo de 10 años (Artículo 7 del DL N° 600), pudiendo extenderse hasta 20 años para proyectos industriales y extractivos de monto no inferior a 50 millones de dólares EE.UU. (artículo 11 *bis*). Los inversores que hayan optado por este régimen pueden renunciar a él una sola vez y acogerse al régimen tributario común.

32. En enero de 2006 entró en vigor la Ley N° 20.026 que modifica el DL N° 600. En virtud de esta Ley, las nuevas inversiones mineras por un monto igual o superior a 50 millones de dólares EE.UU. gozan, por un periodo de 15 años, de la invariabilidad del impuesto sobre la renta específico a la actividad minera, así como de otros tributos, incluidas las regalías o cargas similares y las patentes de exploración y explotación minera. Para acogerse a este régimen especial, los inversores extranjeros con contratos vigentes no deben estar amparados por los regímenes de invariabilidad previstos en los artículos 7 y 11 *bis* del DL N° 600, o bien deben renunciar a ellos en el momento de acogerse al régimen especial (artículo 11 *ter* del DL N° 600).

33. A fin de simplificar los procedimientos y eliminar ciertas restricciones previstas con anterioridad en el DL N° 600, en diciembre de 2006 se permitió a los inversores extranjeros reinvertir hasta el 100 por ciento de sus ganancias (eliminándose el anterior límite del 65 por ciento) y se abrió la posibilidad de reinvertir dichas ganancias en terceras compañías (es decir, no sólo en la empresa que las generó o sus subsidiarias); asimismo, se eliminó el requisito de presentar traducciones oficiales de los documentos que acompañan a las solicitudes de autorización presentadas al Comité de Inversiones Extranjeras.

¹⁵ Artículo 3 del DL N° 600.

¹⁶ Artículo 4 del DL N° 600.

¹⁷ Artículo 8 del DL N° 600.

34. El Capítulo XIV del Compendio de Normas de Cambio Internacionales del Banco Central de Chile establece las normas aplicables a las operaciones de cambios internacionales relativas a créditos, depósitos, inversiones y aportes de capital provenientes del exterior. Con arreglo a este instrumento, el Banco Central no puede rechazar una inversión extranjera, pero sí puede imponer condiciones a la transferencia de fondos hacia y desde Chile para asegurar la estabilidad de la moneda y el normal funcionamiento de los pagos internos y externos. El capital extranjero que ingresa a Chile al amparo del Capítulo XIV recibe trato nacional, pero no puede acogerse a los beneficios que contempla el DL N° 600, incluidas las facilidades de invariabilidad tributaria. Adicionalmente, dicho capital debe registrarse ante el Banco Central, lo que puede efectuarse en cualquier banco comercial antes de convertir el capital en pesos chilenos. No se aplican restricciones a la repatriación del capital que ingresa al amparo del Capítulo XIV.

35. La Ley N° 19.840, publicada en noviembre de 2002, tiene como objetivo alentar a las empresas multinacionales a fin de que utilicen Chile como plataforma regional para invertir en terceros países. La Ley prevé un régimen tributario especial por medio del cual las sociedades constituidas en Chile al amparo de esta Ley pueden realizar inversiones en el extranjero sin tener que soportar en Chile los impuestos a la renta que generen dichas inversiones.¹⁸ Asimismo, la Ley N° 19.840 contiene disposiciones encaminadas a evitar el uso de Chile como paraíso fiscal, o el uso indebido de este régimen por parte de empresas nacionales para evadir el pago de impuestos nacionales. Las empresas que se acogen a este régimen están sujetas a la presentación de informes y no les son aplicables las disposiciones sobre el secreto y reserva bancarios; también deben aceptar controles más estrictos de la autoridad fiscal con relación a los precios de transferencia. Las autoridades han señalado que a marzo de 2009 se habían acogido a este régimen 22 empresas.

ii) Acuerdos internacionales de inversiones

36. Chile ha adoptado disciplinas en materia de inversión en el marco de la mayoría de los acuerdos de comercio preferencial que ha suscrito. En general, los capítulos de inversión incorporados en dichos acuerdos contienen disciplinas sobre liberalización sectorial (mediante listas negativas), trato nacional, trato NMF, nivel mínimo de trato, requisitos de desempeño, libre transferencia de capitales, expropiación y compensación y solución de controversias (incluido el arbitraje inversor-Estado).

37. Chile también cuenta con un amplio número de Acuerdos de Promoción y Protección de las Inversiones (APPI), si bien en los últimos años ha dejado de negociar este tipo de acuerdos para privilegiar la inclusión de disciplinas sobre inversión en sus acuerdos comerciales. A mediados de 2009, Chile mantenía 35 APPI en vigor.¹⁹

38. Desde 1991, Chile es signatario de la Convención de Washington (1965) que creó el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a la Inversión (CIADI). Chile también es miembro del Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (OMGI) y de la Corporación para la Inversión Privada en el Extranjero. Asimismo, Chile ha ratificado la Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional y la Convención sobre el Reconocimiento y Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras. En septiembre de 2004 fue publicada la Ley sobre Arbitraje Comercial Internacional (Ley N° 19.971).

¹⁸ Artículo 41 D de la Ley de Impuesto a la Renta.

¹⁹ La lista de los APPI suscritos por Chile puede consultarse en: <http://www.inviertaenchile.cl>.

39. Durante el periodo examinado, Chile concluyó numerosos acuerdos para evitar la doble imposición. A mediados de 2009, mantenía acuerdos de este tipo con 20 países²⁰, había suscrito acuerdos con cinco países que aún no se encontraban en vigor y concluido la negociación de un acuerdo con otro país. A la misma fecha, Chile se encontraba negociando acuerdos con 14 países más.²¹

4) RELACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES

i) Organización Mundial del Comercio

40. Chile es Miembro fundador de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Chile participó en las negociaciones sobre las telecomunicaciones y los servicios financieros posteriores a la Ronda Uruguay. Los Protocolos Cuarto y Quinto anexos al Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGSC) entraron en vigor para Chile el 16 de junio de 1998. Chile no es signatario del Acuerdo sobre Tecnología de la Información ni de los Acuerdos Plurilaterales de la OMC. Chile otorga al menos el trato NMF a todos sus interlocutores comerciales. La Misión de Chile ante la OMC depende del Ministerio de Relaciones Exteriores.

41. Chile desempeña un papel activo en los trabajos de la OMC y apoya la conclusión exitosa de las negociaciones del Programa de Doha para el Desarrollo, en el marco del cual ha presentado numerosas propuestas, ya sea a título individual o junto con otros países Miembros. Chile ha participado con particular interés en las negociaciones sobre la agricultura, en las que persigue la eliminación de las subvenciones a la exportación y una reducción sustancial de las medidas de ayuda interna que distorsionan el comercio, de los aranceles y de otros obstáculos al acceso a los mercados. En materia de productos industriales, pugna por la eliminación de la progresividad arancelaria. Además, Chile busca mejoras en las normas comerciales, en particular para evitar el abuso de las medidas antidumping; la eliminación de las subvenciones a la pesca; y reformas en las disposiciones sobre solución de diferencias. En el área de servicios, Chile persigue un mayor acceso a los mercados de servicios profesionales, de transporte marítimo y aéreo, y de servicios informáticos.²²

42. Chile considera que es fundamental contar con un sistema multilateral de comercio fortalecido, plenamente legitimado y con principios y reglas claras para el intercambio comercial a nivel global. Además, reconoce que la OMC es el único foro donde se puede dar solución a algunos problemas que los acuerdos bilaterales o regionales no han sido capaces de resolver, tales como el uso de las medidas antidumping con fines proteccionistas y la eliminación de los subsidios agrícolas.²³

43. Las autoridades de Chile se basan en una estrategia comercial que incorpora simultáneamente la apertura unilateral, las negociaciones multilaterales y las aperturas negociadas a través de acuerdos bilaterales y regionales de amplio alcance, compatibles con las normas de la OMC.²⁴

44. Durante el periodo examinado, Chile ha presentado un gran número de notificaciones en el marco de los diferentes Acuerdos de la OMC. El cuadro AII.2 contiene una selección de dichas notificaciones.

²⁰ Argentina, Brasil, Canadá, Corea del Sur, Croacia, Dinamarca, Ecuador, España, Francia, Irlanda, Malasia, México, Noruega, Nueva Zelandia, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Reino Unido y Suecia.

²¹ Los acuerdos de doble tributación en vigor, negociados y suscritos por Chile pueden consultarse en: <http://www.sii.cl/pagina/jurisprudencia/convenios>.

²² Intervención del Canciller Alejandro Foxley en la OMC el 24 de julio de 2008, Ginebra.

²³ Documento de la OMC WT/MIN803)/ST/47 de 11 septiembre de 2003. Véase también el documento de la OMC TN/C/W/39 de 24 de abril de 2006.

²⁴ Información en línea de la DIRECON. Consultado en: <http://www.direcon.cl>.

45. Chile valora la importancia del mecanismo de solución de diferencias de la OMC y ha participado activamente en él. Desde enero de 2003, Chile ha estado involucrado como parte demandada en cuatro diferencias y en dos como parte reclamante²⁵ (cuadro II.1). Asimismo, Chile participó como tercero en 11 diferencias, la mayoría de las cuales se relacionaron con diversas medidas restrictivas aplicadas a productos agropecuarios.

46. Dos de los casos en los que Chile figuró como parte demandada se refirieron a la aplicación de una medida de salvaguardia, primero provisional y luego definitiva, sobre determinados productos lácteos. La Argentina pidió el establecimiento de un Grupo Especial para ambas diferencias, pero solicitó la suspensión de sus trabajos a raíz de la eliminación de la medida por parte de Chile.²⁶ En otro caso se examinaron las medidas adoptadas por Chile para cumplir las recomendaciones del Órgano de Solución de Diferencias con respecto a una diferencia con Argentina sobre el sistema chileno de bandas de precios para ciertos productos agrícolas. En el cuarto caso, la Argentina solicitó consultas con respecto a las medidas antidumping aplicadas por Chile a las importaciones argentinas de harina de trigo. En el momento de redactar este informe no se había establecido un grupo especial.

47. Los casos en que Chile intervino como reclamante se relacionaron con medidas de salvaguardia aplicadas por el Ecuador sobre tableros de fibra de madera y por la Comunidad Europea sobre el salmón. En ninguno de los dos casos se llegó al establecimiento de un Grupo Especial.

Cuadro II.1

Asuntos objeto de solución de diferencias en la OMC en los que ha participado Chile, enero de 2003-junio de 2009^a

Tema	Demandado/ reclamante	Situación	Documento de la OMC
Cuestiones planteadas contra Chile			
Sistema de bandas de precios y medidas de salvaguardia aplicados a determinados productos agrícolas	Chile/Argentina	Solicitud de consultas de conformidad con el artículo 21.5 del ESD (mayo de 2004); solicitud de establecimiento de un Grupo Especial de cumplimiento (diciembre de 2005); constitución del Grupo Especial (abril 2006); distribución del informe del Grupo Especial (diciembre de 2006); apelaciones de Chile y Argentina (febrero de 2007); distribución del informe del Órgano de Apelación (mayo 2007); adopción de los informes del Órgano de Apelación y del Grupo Especial (mayo 2007)	WT/DS207/17 WT/DS207/18 WT/DS207/19 WT/DS207/RW y Corr.1 WT/DS207/22 y 23 WT/DS207/AB/RW WT/DS207/26
Medida de salvaguardia provisional sobre determinados productos lácteos	Chile/Argentina	Solicitud de consultas (octubre de 2006); solicitud de establecimiento de un Grupo Especial para diferencias DS351 y DS356 (marzo de 2007); constitución del Grupo Especial (junio de 2007); suspensión de los trabajos del Grupo Especial (julio de 2007); caducidad de la decisión de establecer un Grupo Especial (agosto de 2008)	WT/DS351/1 WT/DS351/2 WT/DS351/3 WT/DS351/4 WT/DS351/5
Medida de salvaguardia definitiva sobre determinados productos lácteos	Chile/Argentina	Solicitud de consultas (diciembre de 2006); solicitud de establecimiento de un Grupo Especial para diferencias DS351 y DS356 (marzo de 2007); constitución del Grupo Especial (junio de 2007); suspensión de los trabajos del Grupo Especial (julio de 2007); caducidad de la decisión de establecer un Grupo Especial (agosto 2008)	WT/DS356/1 WT/DS356/2 WT/DS356/3 WT/DS356/4 WT/DS356/5

Cuadro II.1 (continuación)

²⁵ Se tienen en cuenta para este informe sólo los casos de solución de diferencias que se iniciaron a partir de 2003, es decir, para los cuales la solicitud de consultas se presentó a partir de ese año.

²⁶ Decreto Exento N° 740 del Ministerio de Hacienda, publicado en el Diario Oficial el 28 de julio de 2007.

Tema	Demandado/ reclamante	Situación	Documento de la OMC
Medidas antidumping sobre las importaciones de harina de trigo procedentes de la Argentina Chile como reclamante	Chile/Argentina	Solicitud de consultas (mayo 2009). A fines de junio de 2009 no se había establecido un grupo especial ni notificado una solución	WT/DS393/1
Medida de salvaguardia definitiva sobre las importaciones de tableros de madera de densidad media	Ecuador/Chile	Solicitud de consultas (noviembre de 2003). No se ha establecido un Grupo Especial, ni notificado una solución	WT/DS303/1
Medida de salvaguardia definitiva relativa al salmón	Comunidad Europea/Chile	Solicitud de consultas (febrero de 2005); en mayo de 2005 Chile retiró formalmente la solicitud de consultas con el fin de poner término al asunto, dado que la medida en litigio se había suprimido en abril de 2005	WT/DS326/1 WT/DS326/4

a A efectos de este cuadro se tienen en cuenta sólo los casos de solución de diferencias que se iniciaron a partir de 2003, es decir, para los cuales la solicitud de consultas se presentó a partir de ese año.

Fuente: Secretaría de la OMC.

ii) Acuerdos comerciales regionales

48. Con objeto de expandir sus mercados en áreas de interés para su oferta exportadora y asegurar reglas estables, Chile ha intensificado su estrategia de concertar acuerdos comerciales regionales (ACR), mediante los cuales las partes se otorgan recíprocamente preferencias comerciales, a la vez que profundiza los acuerdos concluidos en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI). Desde 2003, Chile ha firmado nuevos ACR con: Corea del Sur, los Estados Unidos, la Asociación Europea de Libre Comercio (Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza), China, Panamá, el Perú, Colombia, Australia, el Japón y Turquía, así como un Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica con Nueva Zelanda, Singapur y Brunei Darussalam (P-4) y un acuerdo de alcance parcial con la India. Todos estos acuerdos se encontraban vigentes en junio de 2009, excepto el Acuerdo con Turquía.

49. Además, Chile mantiene ACR con el Canadá, México, Centroamérica (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua)²⁷ y un Acuerdo de Asociación Económica con la Comunidad Europea. Asimismo, tiene Acuerdos de Complementación Económica (ACE) bajo la ALADI con Bolivia, el Ecuador²⁸, Venezuela y el MERCOSUR (la Argentina, el Brasil, el Paraguay y el Uruguay) y un acuerdo de alcance parcial con Cuba.

50. En total, Chile ha suscrito 21 ACR con 57 socios comerciales, lo que lo sitúa entre los países del mundo con un mayor número de acuerdos y socios preferenciales. El incremento en el número de acuerdos ha sido notable: en 2003 Chile había firmado 8 ACR con 39 socios comerciales. En consecuencia, entre 2003 y 2008 la proporción del comercio de bienes que Chile realiza con socios preferenciales aumentó del 52 por ciento al 92 por ciento de su comercio total (importaciones y exportaciones, tanto NMF como preferenciales).²⁹ No existe información disponible sobre el valor de las importaciones o exportaciones chilenas que se han realizado en la práctica al amparo de los ACR.

²⁷ En el marco del TLC Chile-Centroamérica, a junio de 2009 se encontraban vigentes los protocolos bilaterales suscritos por Chile con Costa Rica, El Salvador y Honduras. El protocolo bilateral con Guatemala se había suscrito pero aún no estaba en vigor; el protocolo bilateral con Nicaragua aún no se había firmado.

²⁸ Chile y el Ecuador firmaron un nuevo ACE (2008), que aún no había entrado en vigor a mediados de 2009.

²⁹ El cuadro AII.3 indica el valor del comercio total de Chile con determinados socios preferenciales.

51. Como en el caso de otros Miembros activamente involucrados en ACR, los efectos económicos de la red de acuerdos de Chile son complejos. En el caso particular de Chile, las preocupaciones que suscita su extensa y creciente red de ACR se ven paliadas por su sólido apoyo al Mecanismo de Transparencia para los Acuerdos Comerciales Regionales, a la Ronda de Doha y, de manera general, al sistema multilateral de comercio.³⁰

52. A mediados de 2009, Chile mantenía procesos de negociación, en diversas fases de desarrollo, para la conclusión de ACR con Malasia, Tailandia y Vietnam. Asimismo, la amplia agenda de negociaciones comerciales de Chile incluye acercamientos con Hong Kong, países del Medio Oriente, Israel, Rusia y el Consejo de Cooperación del Golfo.

53. El cuadro AII.3 presenta un resumen de las principales características de los ACR que mantenía Chile en vigor a enero de 2009 (no incluye los Acuerdos de Complementación Económica ni los acuerdos de alcance parcial)³¹. Como se puede observar en el cuadro, en general los ACR que ha concertado Chile tienen un amplio alcance, pues comprenden disposiciones sobre el comercio de bienes y servicios, al igual que sobre materias tales como inversión, propiedad intelectual, política de competencia, contratación pública, transparencia y solución de controversias, entre otras.

54. Los calendarios para la completa desgravación arancelaria previstos en los ACR fluctúan entre 6 y 18 años, si bien en la gran mayoría de los casos el grueso de las líneas arancelarias se liberalizó a la entrada en vigencia del acuerdo respectivo o en sus primeros años. Los productos excluidos de la desgravación por Chile también varían según el acuerdo, pero en general se refieren a productos agrícolas, principalmente a aquéllos sujetos al sistema de banda de precios (trigo, harina de trigo y azúcar), así como a algunos rubros de los productos químicos, minerales, madera, textiles y confección, calzado y electrodomésticos.

55. Los ACR contienen las disciplinas tradicionales relativas al comercio de bienes, tales como acceso al mercado, normas de origen, procedimientos aduaneros, reglamentos técnicos, medidas sanitarias y fitosanitarias, y medidas de defensa comercial, entre otras. Cabe destacar que en materia de antidumping, varios ACR se limitan a hacer referencia al Acuerdo de la OMC (por ejemplo, el P-4 y los acuerdos con los Estados Unidos y China), en tanto que otros prevén la eliminación o la no aplicación de estas medidas (ACR con el Canadá y con la AELC), o bien no incluyen disposiciones en esta esfera (acuerdo con el Japón). En cuanto a las subvenciones, varios ACR prevén la no aplicación de subvenciones a la exportación de productos agrícolas (acuerdos con el Canadá, México y el P-4), mientras que otros omiten toda disposición en materia de subvenciones (acuerdos con los Estados Unidos, con Centroamérica y con la Comunidad Europea), o sólo reafirman los compromisos asumidos en el marco del respectivo Acuerdo de la OMC (acuerdo con China).

56. Los ACR suscritos por Chile contienen, por lo general, las disposiciones habituales sobre el comercio transfronterizo de servicios tales como acceso al mercado, no discriminación (trato nacional y NMF), presencia local, denegación de beneficios, medidas disconformes y reservas, entre otras. Si bien la mayoría de los acuerdos contiene además capítulos y/o anexos con disposiciones sobre telecomunicaciones, servicios profesionales y entrada temporal de personas de negocios, éste no es el caso de los servicios financieros. Por ejemplo, mientras algunos ACR contienen capítulos sobre servicios financieros (los acuerdos con el Japón, Australia, los Estados Unidos y la Comunidad Europea), otros prevén negociaciones futuras para su inclusión (los ACR con Corea, el P-4, la AELC, Colombia, el Perú y China), o bien excluyen los servicios financieros (ACR con Centroamérica).

³⁰ Información detallada sobre el Mecanismo de Transparencia para los Acuerdos Comerciales Regionales se puede consultar en: http://www.wto.org/spanish/tratop_s/region_s/region_s.htm.

³¹ Los ACE de Chile con Bolivia, el Ecuador, Venezuela y MERCOSUR fueron descritos en informes de la Secretaría de exámenes anteriores de Chile. Ver OMC (1997) y OMC (2003).

57. De forma similar, el alcance de las disciplinas relativas a la inversión varía entre los ACR. Por ejemplo, los acuerdos con la Comunidad Europea y la AELC se limitan a otorgar el trato nacional al establecimiento de los inversores de la otra parte en los sectores enumerados en una lista, si bien su alcance se complementa con los acuerdos bilaterales de protección recíproca de las inversiones suscritos por Chile con esos países. Por su parte, el ACR con los Estados Unidos y otros acuerdos de tipo similar incorporan compromisos de liberalización sectorial, trato nacional, trato NMF, nivel mínimo de trato, requisitos de desempeño, expropiación y compensación y solución de controversias (incluyendo arbitraje inversor-Estado), entre otros.

58. Las autoridades chilenas otorgan gran importancia a la adecuada administración de su red de ACR y consideran que el alto nivel técnico y la continuidad del personal que negocia los acuerdos y los administra han permitido lograr este objetivo.

iii) Otros acuerdos y arreglos

59. Desde 1994, Chile es miembro del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y en 2004 fue Economía anfitriona de dicho foro. Los miembros desarrollados del APEC se han comprometido a liberalizar el comercio de bienes y servicios en la región de Asia-Pacífico en 2010, en tanto que los miembros en desarrollo lo harán en 2020. Chile se ha comprometido a liberalizar su comercio de bienes y servicios para el 2010 al igual que los miembros desarrollados de ese foro.³² En el contexto de este examen, las autoridades han indicado que estas metas se cumplirán como resultado de los acuerdos comerciales suscritos por Chile que han dado lugar a un arancel preferencial promedio del 1,3 por ciento aproximadamente, así como por el hecho que Chile mantiene regímenes abiertos para el comercio de servicios y las inversiones, con contadas excepciones.

60. Asimismo, Chile participa en la Iniciativa de la Cuenca del Pacífico Latinoamericano (Arco del Pacífico), foro de coordinación y concertación en materia económica y comercial entre once países latinoamericanos con litoral en el Océano Pacífico, que buscan fortalecer sus relaciones con las economías de la región Asia-Pacífico.³³

61. Chile ha participado en las negociaciones para el establecimiento del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), emprendidas en 1994 con el fin de eliminar progresivamente los obstáculos al comercio de bienes y servicios entre 34 naciones del hemisferio occidental. A principios de 2009 el proceso no había concluido y se encontraba suspendido.

62. Chile es beneficiario del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP). Durante el periodo examinado recibió preferencias en el marco los respectivos esquemas del Japón, Nueva Zelandia y Suiza. De acuerdo con cifras proporcionadas por las autoridades, durante el periodo 2005-08, Chile emitió cerca de 28.000 certificados de origen para exportaciones de productos que se acogieron a las preferencias otorgadas en el marco del SGP. Chile también forma parte del Sistema Global de Preferencias Comerciales entre Países en Desarrollo (SGPC), pero las autoridades han indicado que no se han otorgado certificados de origen para exportaciones amparadas por este esquema. Chile ha participado en la Tercera Ronda de Negociación del SGPC que se inició en 2004.

63. Chile se encuentra negociando su ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el cual se espera tenga lugar a finales de 2009 o principios de 2010.

³² La lista de los miembros del APEC puede consultarse en: http://www.apec.org/apec/member_economies.html.

³³ Los países que integran la Iniciativa de la Cuenca del Pacífico Latinoamericano son: Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, Guatemala, Honduras, El Salvador, México, Nicaragua, Perú y Panamá.